

Margarita López Maya (editora). *Lucha popular, democracia, neoliberalismo: protesta popular en América Latina en los años del ajuste*. Caracas: Nueva Sociedad, 1999, 264 páginas.

Este libro presenta una compilación de diez artículos elaborados por investigadores de Argentina, México, Colombia, Guatemala, Brasil, República Dominicana y Venezuela, producto de sus investigaciones sobre luchas y movimientos sociales en estos países. La intención del libro, según la compiladora, es tratar de llegar de manera conjunta a algunas hipótesis sobre los procesos de protesta y sus relaciones con el neoliberalismo y descubrir el modo en que los sectores más golpeados en sus expectativas y condiciones de vida por las políticas de ajuste han comenzado a demandar sus derechos.

Los artículos presentan diversos enfoques teóricos, distintos acentos y distintos niveles de análisis. No obstante esta variedad, hay en todos los autores una preocupación por dar a conocer al lector las transformaciones económicas, sociales, políticas, institucionales y culturales que han vivido sus países durante los últimos decenios. En todos ellos, la crisis económica que se pretendía superar con la aplicación del paquete de medidas de ajuste estructural neoliberal, ha ido acompañada de una crisis de legitimidad del Estado y de representatividad de los partidos políticos tradicionales. Ni los canales de negociación de conflictos ni las redes clientelistas, pudieron contener la complejidad de demandas de sociedades que se modernizaron con celeridad.

En el decenio anterior, ciudades y regiones enteras de los países analizados fueron escenario de protestas que no son mera consecuencia del ajuste macroeconómico. Margarita López, en su estudio sobre la protesta popular en Venezuela en el umbral del neoliberalismo, señala que al deterioro en las condiciones de vida de amplios sectores de la población, se sumaron tanto la debilidad político institucional por el proceso de deslegitimación y pérdida de representatividades políticas —que abrió una estructura de oportunidades políticas para la movilización— como la «indignación moral» ante la ausencia del Estado para ejercer justicia y protección para todos. De tal manera, las protestas sociales dejan al descubierto la escisión profunda entre las necesidades populares y la esfera política, como lo afirman Rubén Laufer y Claudio Spiguel en su artículo sobre las «puebladas» argentinas.

Estos ensayos muestran la existencia, en cada país, de conflictos estructurales de diversa índole no resueltos que se van nutriendo de conflictos nuevos —por ejemplo, los efectos de la aplicación del paquete neoliberal— y desencadenan situaciones que renuevan y actualizan los problemas. Estas complejas redes de conflictos que preceden y operan como trasfondo de las protestas, son las condiciones de surgimiento de la acción colectiva y están implícitas en la movilización a través de la cual la protesta adquiere una forma particular, afirma Adrián Scribano, al hacer una relectura de la noción de conflicto de Melucci, en su artículo sobre los cortes de ruta en Argentina.

Precisamente por el entrelazamiento de conflictos coyunturales y estructurales es necesario tener en cuenta el llamado de atención que hacen dos autores, Medófilo

Medina quien analiza el caso colombiano y Carlos Figueroa que presenta el caso guatemalteco: en aquellos países que viven un conflicto armado interno o que están en proceso de reconstrucción después de una guerra, la protesta popular actual no responde solamente a la implantación del neoliberalismo —aunque éste actúa como factor de agudización de las luchas sociales—, es también la lucha por la democracia, por el respeto a los derechos humanos, por la solución negociada del conflicto armado y por la reconstrucción del tejido de organizaciones sociales, desarticulado por efectos del terror estatal o la criminalización de la protesta social.

Pero la violencia política no es exclusiva de países en guerra, como lo dejan ver los análisis del caso mexicano, realizados por Raquel Sosa y Carlos Mosivais, o el del Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Brasil, presentado por Bernardo Manzano Fernandes. Sosa propone entenderla como un modo de interlocución extrema entre contendientes desiguales en la lucha por el poder que, durante el neoliberalismo, se constituye en una forma usual de actuar los grupos dominantes frente a demandas de los grupos subordinados que consideran inatendibles. Es un método para conseguir la contención —que no la solución— de enfrentamientos y de polarización económica, social y política que sus propias acciones han producido. Lo común ahora es una guerra de intensidad media en la que los gobiernos actúan selectivamente contra sus opositores, sin cancelar por completo sus derechos políticos, sin establecer verdaderas formas de negociación ni canalizar, aunque sea parcialmente, sus demandas en términos institucionales. Monsivais estaría en parte de acuerdo con esta afirmación ya que, aunque reconoce las luchas emprendidas por vastos sectores de la sociedad, con escasos recursos a su disposición, contra la impunidad, las torturas, los secuestros, las desapariciones, el despojo gubernamental y empresarial de tierras y bienes, la violencia intrafamiliar, las violaciones, los despidos sin justificación, las agresiones a causa de la orientación sexual y el reconocimiento social de la extrema pobreza de los derechos económicos —parte esencial de los derechos humanos—, no se observan cambios significativos.

Por su parte, Manzano Fernandes hace varias referencias a formas de violencia política ejercida contra los campesinos brasileños que desde 1984 constituyeron el más grande movimiento social de Latinoamérica: el de los sin tierra. Entre ellas, las acciones de la policía militar — durante las cuales han ocurrido masacres de campesinos— para enfrentar el agudo ascenso de las ocupaciones de fundos, debido a la agudización de la crisis de la agricultura que ha dejado a más campesinos sin tierra y a más trabajadores agrícolas asalariados sin empleo. Otra forma de violencia institucionalizada la constituye el proceso de judicialización de la lucha por la reforma agraria, que ha implicado prisiones y masacres de líderes del Movimiento de los sin Tierra.

Otro elemento común a la mayoría de estos ensayos se refiere al surgimiento de nuevos sujetos sociales que logran visibilidad y recuperan la condición de ciudadanos que tienen derecho a reclamar ante el Estado y, además, están en la búsqueda de nuevas identidades colectivas. Aunque lo que aparece en la superficie de las protestas analizadas son formas de confrontación y contenidos fragmentados y un «sujeto político popular» más difuso, una indagación más juiciosa permite ver que las

protestas han recreado nuevas formas de articulación y representación y nuevos espacios de negociación que han sido relativamente exitosos en la promoción de modestos cambios y en el futuro podrían influir en el establecimiento de nuevas identidades políticas, según afirma Lilian Bobea en su ensayo sobre las articulaciones entre los movimientos populares y el Estado en República Dominicana.

El caso guatemalteco ilustra este tema. Según reseña Figueroa, la emergencia de los indígenas, a partir de mediados de los 80, está transformando la autopercepción de los distintos grupos sociales que cada vez se conciben más como insertos en una sociedad pluriétnica y el movimiento popular ha pasado de ser una coalición de clases a ser un mosaico de identidades del más diverso género.

Este conjunto de artículos pone en evidencia, como lo dice Carlos Monsivais, que el «fin de la historia» acrecienta las protestas. El conflicto social que se perfila para los próximos años, contendrá nuevas formas de lucha, nuevos actores, nuevas demandas sociales y un modelo económico con posibilidades limitadas de dar respuesta a toda esa complejidad.

Y una frase final que viene bien al caso colombiano en el actual contexto: «Las protestas contra planes privatizadores revelan que la paz política dista mucho de ser paz social. La guerra acabó con la dictadura pero no acabó con la miseria» Carlos Figueroa.

Martha Cecilia García V.
Investigadora CINEP